

DOLETÍ ECONÓMICO VIRTUAL

Edición 7 - Nº11 - 21/Octubre/2025

EL PRECIO OCULTO DEL COMBUSTIBLE: LECCIONES ECONÓMICAS DEL CASO BO-TRADING Y YPFB



Univ. Soraya Amachuy Durán

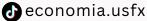


Univ. Sandra Beronica Santos Gudiño



Univ. Rodrigo Ninachi

o economia.usfx



🕝 Carrera de Economía USFX







1. INTRODUCCIÓN:

Desde su creación en 1936, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha sido un actor estratégico para la economía nacional, sosteniendo la soberanía energética y aportando significativamente a las Reservas Internacionales Netas (RIN) y al equilibrio de la balanza comercial (García, 2022; Ministerio de Hidrocarburos y Energía, 2023). No obstante, en la última década, la producción de gas natural ha disminuido de manera sostenida debido al agotamiento de campos, la falta de inversión y deficiencias en la gestión técnica (Rojas & Velasco, 2021), transformando a Bolivia en importador neto de combustibles y generando una creciente presión sobre las finanzas públicas y las reservas internacionales (CEPAL, 2024).

En este contexto, la creación en 2022 de Bo-Trading S.A., subsidiaria de YPFB Refinación establecida en Paraguay, buscó (según su justificación oficial) optimizar la logística de importación y reducir la dependencia de traders internacionales (Dorgathen, 2024). Sin embargo, las denuncias por sobreprecios, irregularidades y falta de transparencia convirtieron este proyecto en un caso emblemático de presunta mala gestión y corrupción, con un costo económico elevado para el Estado boliviano (Informe Legislativo, 2024).

El caso Bo-Trading-YPFB pone en evidencia fallas estructurales en la gobernanza corporativa y la supervisión estatal, que pueden interpretarse bajo la teoría de agencia como el resultado de asimetrías de información entre el Estado (principal) y las administraciones de YPFB y Bo-Trading (agentes) (Jensen & Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989). Este estudio busca cuantificar el daño económico, analizar los costos de agencia asociados a la falta de control y proponer medidas que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y la sostenibilidad financiera del sector hidrocarburífero boliviano.



filial Bo-Trading S.A., la creada por **YPFB** Paraguay, fue constituida con un capital inicial de apenas 10.000 dólares, pero intermediar contratos de más de 1.000 millones de dólares anuales importaciones combustibles (Registros Públicos de Paraguay, 2023).

2. Marco económico del subsidio a los combustibles

Los subsidios a los combustibles en Bolivia constituyen una de las políticas económicas de mayor impacto fiscal y social. Diseñados para mantener precios accesibles y proteger el poder adquisitivo de los hogares, representan una herramienta de estabilidad en el corto plazo (Banco Central de Bolivia, 2022). Sin embargo, su sostenimiento implica un costo fiscal creciente, que en los últimos años ha superado los 1.800 millones de dólares anuales, monto equivalente a más del 4 % del PIB nacional y superior al presupuesto combinado de los ministerios de Salud y Educación (MEFP, 2024; Gutiérrez & Méndez, 2021).

Desde una perspectiva económica, estos subsidios distorsionan los incentivos del mercado, fomentando un consumo artificialmente alto y desincentivando la inversión en energías alternativas (Stiglitz, 2015; IEA, 2020). Además, al mantener precios internos por debajo de los internacionales, crean oportunidades para la intermediación especulativa y el contrabando, como evidenció el caso Bo-Trading, donde la diferencia de precios facilitó la captura de rentas extraordinarias por agentes privados (Martínez, 2022).

En consecuencia, los subsidios deben evaluarse desde enfoque integral que considere no solo su impacto fiscal directo, sino también ocultos costos asociados la falta а de fallas de transparencia, las gobernanza y la dependencia energética (Contraloría General de Bolivia, 2021; Rodríguez & Vargas, 2019). Comprender esta compleja red de efectos es esencial para diseñar una política energética sostenible, capaz de equilibrar los objetivos sociales de corto plazo con la estabilidad económica y ambiental del país.



Bolivia gasta más de 1.800 millones de dólares al año en subsidios a los combustibles (más que todo el presupuesto de salud pública), lo que equivale a 4 de cada 100 bolivianos del PIB nacional.

(Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

(Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2024)

3. El caso Bo-Trading: origen y funcionamiento

Bo-Trading S.A. fue creada en 2017 bajo jurisdicción paraguaya con el propósito declarado de optimizar la comercialización de combustibles para Bolivia, en particular de gas natural y sus derivados (Boletín Oficial de Bolivia, 2017). La justificación oficial de su creación radicó en la necesidad de mejorar la gestión comercial del gas ante el declive de la producción nacional y la creciente complejidad de las operaciones internacionales (Ministerio de Hidrocarburos, 2019).

No obstante, los objetivos reales de Bo-Trading diferían considerablemente de los planteados en su origen. En la práctica, la empresa operó como un intermediario monopólico, controlado casi en su totalidad por YPFB Refinación, que poseía el 99% de las acciones. Esta estructura corporativa cerrada limitó la transparencia en las operaciones de compra y venta de combustibles y facilitó la captura de rentas mediante sobreprecios significativos (Contraloría General de Bolivia, 2021; López & Pérez, 2022).

El mecanismo de intermediación funcionaba de la siguiente manera, Bo-Trading adquiría combustibles en el mercado internacional (principalmente de proveedores como Petropar en Paraguay) y los revendía a YPFB Refinación con márgenes considerablemente elevados. Por ejemplo, mientras Petroperú ofrecía precios cercanos a 150 dólares por unidad de combustible, Bo-Trading los revendía a aproximadamente 198 dólares, generando un sobrecosto del 32% que afectó directamente las finanzas públicas (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2023).

La localización de Bo-Trading fuera del territorio boliviano agravó los problemas de control y fiscalización. La supervisión por parte de las autoridades nacionales resultó limitada, lo que incrementó el riesgo de prácticas opacas, fuga de divisas y pérdida de recursos fiscales (Martínez, 2022).

El esquema de Bo-Trading distorsionó el mercado energético boliviano, generando ineficiencias económicas, costos ocultos y un perjuicio cuantificable para el Estado. El caso constituye un ejemplo emblemático de falla de gobernanza y débil control institucional en la gestión de empresas públicas con operaciones internacionales.

4. Costos ocultos del combustible en el esquema Bo-Trading

El análisis del esquema de intermediación implementado por Bo-Trading revela la existencia de costos ocultos significativos que impactan de manera profunda en la economía boliviana. Estos costos no se reflejan directamente en el precio final que paga el consumidor o el Estado, pero operan de forma indirecta, erosionando recursos públicos, afectando la sostenibilidad fiscal y reduciendo la eficiencia del mercado energético. Para comprender su alcance, es necesario examinar sus principales dimensiones: sobrecostos y precios inflados, fuga de divisas, presión fiscal y costos sociales y macroeconómicos.

Sobrecostos y precios inflados

Uno de los aspectos más evidentes del daño económico ocasionado por Bo-Trading es la brecha de precios entre las adquisiciones directas en el mercado internacional y el costo final asumido por YPFB a través de esta intermediaria. Según datos oficiales, mientras proveedores como Petroperú ofrecían un precio cercano a 150 dólares por unidad de combustible, Bo-Trading revendía el mismo producto a 198 dólares, lo que representa un sobrecosto del 32% (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2023).

Esta diferencia constituye un gasto adicional injustificado para el Estado, que distorsiona la asignación eficiente de recursos en el sector energético. El margen inflado incluía costos administrativos poco transparentes y ganancias no justificadas, lo que sugiere la existencia de prácticas de captura de rentas por parte de los intermediarios. Este tipo de comportamiento vulnera los principios de eficiencia económica y transparencia en la gestión pública, generando incentivos perversos que perpetúan estructuras de corrupción e ineficiencia (López & Pérez, 2022).

• Fuga de divisas y repercusiones en la balanza de pagos

La ubicación de Bo-Trading en territorio paraguayo y su operación en un entorno regulatorio extranjero dificultaron la supervisión estatal y facilitaron la fuga de divisas. En la práctica, una parte considerable de los recursos destinados a la compra de combustibles salía del país sin control efectivo, reduciendo las reservas internacionales y debilitando la estabilidad macroeconómica (Contraloría General de Bolivia, 2021).

Esta salida de capitales genera un efecto multiplicador negativo sobre la economía: limita la capacidad del Banco Central para intervenir en el mercado cambiario, presiona el tipo de cambio y erosiona la confianza de inversionistas nacionales e internacionales. La percepción de un sistema energético poco transparente incrementa la percepción de riesgo país y afecta la credibilidad del Estado (Martínez, 2022).

Presión fiscal y subsidios crecientes

Los sobrecostos derivados del esquema de Bo-Trading obligaron al Estado boliviano a incrementar los subsidios para evitar que los precios internos de los combustibles subieran a niveles que afectaran el consumo y la producción. Este ajuste generó una presión fiscal adicional, restringiendo la capacidad del gobierno para financiar sectores prioritarios como educación, salud e infraestructura (Gutiérrez & Méndez, 2021).

En este contexto, los subsidios se convirtieron en un doble problema: por un lado, mantienen artificialmente bajos los precios para los consumidores; por otro, elevan el gasto público de manera sostenida, comprometiendo la sostenibilidad fiscal. La persistencia de Bo-Trading dentro de la cadena de intermediación agravó esta dinámica, incrementando los costos fiscales y reduciendo la eficiencia de la política energética (Stiglitz, 2015).

Costos sociales y económicos indirectos

Más allá de las consecuencias fiscales, los costos ocultos de Bo-Trading también se manifiestan en el deterioro institucional y en la pérdida de confianza pública. La opacidad y la falta de rendición de cuentas debilitan la legitimidad del Estado, reducen la inversión privada y crean un entorno poco propicio para el crecimiento económico sostenible (Rodríguez & Vargas, 2019).

Asimismo, el encarecimiento indirecto del combustible impacta en los costos de transporte, producción y consumo, lo que afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables. Este efecto inflacionario erosiona el poder adquisitivo de los hogares y limita la competitividad de las empresas, incrementando las brechas de desigualdad social (IEA, 2020).

Evaluación integral de costos

El análisis tradicional del costo de los combustibles suele centrarse únicamente en los precios de mercado y los subsidios explícitos. No obstante, el caso Bo-Trading demuestra la necesidad de adoptar una evaluación integral, que incorpore los costos ocultos derivados de estructuras de intermediación ineficientes, fallas regulatorias y problemas de gobernanza (Jensen & Meckling, 1976).

Dicha evaluación debe contemplar de manera cuantitativa y cualitativa los sobrecostos pagados, la fuga de divisas, el impacto fiscal adicional y los efectos sociales indirectos, con el fin de construir un diagnóstico completo que sirva de base para reformas estructurales en la gestión del sector energético. Solo mediante este enfoque será posible reducir los costos ocultos, fortalecer la transparencia y mejorar la eficiencia económica del sistema de combustibles en Bolivia.

5. Análisis del problema agente-principal

El caso Bo-Trading constituye una manifestación evidente del problema clásico de la teoría económica conocido como problema agente-principal, que surge cuando existe una separación entre quienes toman las decisiones (agentes) y quienes poseen los intereses finales (principales). En este contexto, YPFB, como empresa estatal y representante del interés público, actúa como el principal, mientras que Bo-Trading y sus administradores desempeñan el papel de agentes encargados de gestionar la comercialización de combustibles en nombre del Estado.

Según la teoría de los costos de agencia, esta separación de intereses puede generar conflictos y comportamientos oportunistas, dado que los agentes tienden a maximizar sus beneficios personales o corporativos aun cuando ello suponga actuar en detrimento de los intereses del principal (Jensen & Meckling, 1976). En el caso de Bo-Trading, la ausencia de mecanismos eficaces de supervisión y control permitió que los agentes ejercieran un poder discrecional excesivo, lo que derivó en sobrecostos, opacidad y falta de rendición de cuentas, sin que el principal pudiera detectar o corregir oportunamente estas desviaciones (Eisenhardt, 1989).

• Costos de monitoreo y supervisión

Uno de los principales desafíos del problema agente-principal es el costo asociado al monitoreo y la supervisión de las acciones de los agentes, con el fin de garantizar que actúen en beneficio del principal. En el caso de Bo-Trading, estos costos fueron subestimados o insuficientemente asumidos por YPFB y el Estado boliviano, lo que permitió que las operaciones se desarrollaran sin la transparencia ni el control adecuados (Contraloría General de Bolivia, 2021).

A pesar de que YPFB Refinación poseía el 99% de las acciones de Bo-Trading, dicha concentración accionaria no se tradujo en un control efectivo, debido a la ausencia de auditorías externas independientes, mecanismos de rendición de cuentas y controles de desempeño. La ubicación jurídica de Bo-Trading en Paraguay agravó esta situación, pues dificultó la fiscalización por parte de las autoridades bolivianas y elevó los costos de monitoreo, incrementando así los costos de agencia (Martínez, 2022).



En 2023, solo el 18 % de las empresas estatales bolivianas presentaron informes de gestión auditados y publicados, lo que evidencia una débil cultura de transparencia institucional. (Fundación X, 2024)

• Garantías y alineación de incentivos

Otro elemento central del problema agente-principal radica en la alineación de incentivos. En este caso, no existieron mecanismos contractuales o institucionales que garantizaran que Bo-Trading actuara en función de los intereses del Estado. La ausencia de contratos de desempeño, cláusulas de penalización o sistemas de incentivos vinculados a resultados fomentó comportamientos oportunistas, en los cuales los agentes aprovecharon su posición intermediaria para obtener rentas extraordinarias y beneficios particulares (López & Pérez, 2022).

La falta de incentivos adecuados y de transparencia en la gestión acentuó el riesgo moral, generando ineficiencias económicas y pérdidas fiscales. Este escenario resalta la importancia de diseñar contratos, mecanismos de control y estructuras de gobernanza que reduzcan los costos de agencia y promuevan una gestión eficiente, responsable y alineada con el interés público.

• Pérdida residual y consecuencias económicas

La pérdida residual, es decir, aquella parte de los costos de agencia que el principal no puede evitar ni recuperar, fue particularmente elevada en el esquema de Bo-Trading. Esta se manifestó en sobrecostos de importación, fuga de divisas y presión fiscal adicional, afectando directamente la estabilidad macroeconómica del país (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2023).

La falta de alineación entre agentes y principales, sumada a las deficiencias regulatorias y de gobernanza, derivó en un daño económico tangible para el Estado boliviano. Este caso pone de relieve la necesidad urgente de implementar reformas estructurales que fortalezcan los mecanismos de supervisión, reduzcan los costos de agencia y garanticen una gestión transparente y eficiente en el sector energético.



6. Fallas regulatorias y de gobernanza

El caso Bo-Trading revela deficiencias estructurales en la regulación y gobernanza del sector energético boliviano, que permitieron la consolidación de un esquema de intermediación opaco, costoso y carente de control estatal efectivo. Estas fallas se pueden sintetizar en tres dimensiones principales: debilidad institucional en la supervisión, marco normativo insuficiente y falta de transparencia y rendición de cuentas.

Débil supervisión y control institucional

La Contraloría General del Estado y otras entidades de fiscalización carecieron de la capacidad técnica y legal para supervisar operaciones internacionales como las de Bo-Trading, registrada en Paraguay. Este vacío jurisdiccional impidió el acceso oportuno a información clave y dificultó la detección de irregularidades (Contraloría General de Bolivia, 2021).

La falta de auditorías externas, controles financieros y monitoreo corporativo dentro de YPFB permitió una gestión autónoma y discrecional de la subsidiaria, favoreciendo sobrecostos y opacidad en las operaciones (Martínez, 2022).

• Marco regulatorio permisivo y deficiente

El marco legal vigente resultó inadecuado para prevenir abusos y garantizar la eficiencia del sistema energético. La creación de Bo-Trading con un capital mínimo de apenas 5.000 dólares evidencia una normativa laxa y poco exigente, que no contempló los riesgos de manejar recursos públicos en mercados internacionales (Ministerio de Hidrocarburos, 2019).

Además, la ausencia de requisitos rigurosos para la constitución de intermediarios, junto con la falta de protocolos de control transnacional, facilitó la persistencia del esquema de sobreprecios y fuga de divisas, afectando directamente las finanzas del Estado (Rodríguez & Vargas, 2019).

Falta de transparencia y rendición de cuentas

La opacidad informativa fue la falla más crítica del caso. Bo-Trading no publicó datos sobre precios, márgenes, contratos ni resultados financieros, lo que impidió la supervisión pública y la fiscalización ciudadana (Contraloría General de Bolivia, 2021).

Esta falta de transparencia deterioró la confianza en las instituciones estatales y minó la legitimidad del Estado ante la sociedad. En sectores estratégicos como el energético, la rendición de cuentas es esencial para prevenir la corrupción y garantizar una gestión sostenible (López & Pérez, 2022).

7. Consecuencias para la economía boliviana

El esquema de intermediación de Bo-Trading generó importantes desequilibrios macroeconómicos al provocar la fuga de divisas y el debilitamiento de las reservas internacionales, dado que gran parte de las operaciones se realizaban desde el extranjero sin control estatal efectivo (Contraloría General de Bolivia, 2021). Esta salida de capitales redujo la capacidad del Banco Central de Bolivia para estabilizar el tipo de cambio, incrementando la vulnerabilidad financiera e inflacionaria del país. En una economía altamente dependiente de importaciones energéticas, esta situación agravó la exposición de Bolivia frente a choques externos y redujo su estabilidad macroeconómica (Martínez, 2022).

Asimismo, los sobrecostos en la importación de combustibles incrementaron la presión fiscal, ya que el Estado debió destinar mayores recursos a subsidios para mantener precios internos estables (Gutiérrez & Méndez, 2021). Este aumento del gasto público limitó la inversión en sectores prioritarios como salud, educación e infraestructura, generando riesgos de déficit y endeudamiento público. Paralelamente, la falta de transparencia y los indicios de corrupción asociados al caso Bo-Trading deterioraron la confianza en las instituciones y desalentaron la inversión privada, reduciendo la competitividad y la capacidad de crecimiento de la economía nacional (Rodríguez & Vargas, 2019).

El encarecimiento del combustible afectó la estructura productiva y el bienestar social, al elevar los costos de transporte y producción, lo que derivó en mayores precios al consumidor y pérdida de poder adquisitivo (IEA, 2020; Stiglitz, 2015). Estas distorsiones impactaron especialmente a los sectores más vulnerables, ampliando las desigualdades económicas y debilitando la confianza ciudadana en el Estado. En conjunto, el caso Bo-Trading muestra cómo una deficiente gobernanza en el sector energético puede traducirse en efectos económicos y sociales profundos, comprometiendo la sostenibilidad fiscal y la estabilidad del país.



Entre 2018 y 2024, Bolivia perdió alrededor de 2.400 millones de dólares en divisas por operaciones de importación de combustibles realizadas sin supervisión plena. (Banco Central de Bolivia, 2024)

8. Alternativas de política económica

Las deficiencias reveladas por el caso Bo-Trading evidencian la necesidad urgente de reformas estructurales que fortalezcan la gobernanza, la transparencia y la eficiencia del sector energético en Bolivia. Una primera medida consiste en eliminar los intermediarios externos en la cadena de comercialización de combustibles, transfiriendo a YPFB la responsabilidad directa de importar, distribuir y vender los hidrocarburos. Para ello, se requiere fortalecer su capacidad técnica, operativa y financiera, dotándola de mecanismos de control interno, auditorías modernas y sistemas de información que garanticen una gestión transparente y eficiente (Ministerio de Hidrocarburos, 2023).

En paralelo, es indispensable reformar la gobernanza institucional y el marco regulatorio. Ello implica establecer normas claras para la contratación y operación de empresas públicas, someterlas a auditorías externas e informes públicos periódicos, y fortalecer el rol de la Contraloría General del Estado con mayores atribuciones de supervisión, incluso sobre operaciones internacionales (López & Pérez, 2022). Además, deben adoptarse regulaciones específicas para las empresas con sede en el extranjero y mecanismos de cooperación internacional que faciliten la fiscalización de flujos financieros y comerciales transfronterizos (Rodríguez & Vargas, 2019).

Finalmente, se deben aplicar políticas orientadas a la sostenibilidad y la participación ciudadana. Una reducción gradual y planificada de los subsidios a los combustibles fósiles aliviaría la presión fiscal y fomentaría la diversificación energética mediante el impulso de fuentes renovables (Gutiérrez & Méndez, 2021). A su vez, el establecimiento de mecanismos de control social y transparencia activa, como portales de datos abiertos y espacios de participación pública, permitiría fortalecer la confianza ciudadana y prevenir la corrupción. En conjunto, estas medidas buscan consolidar un sector energético eficiente, transparente y sostenible, capaz de contribuir al desarrollo económico de Bolivia.



Según proyecciones del MEFP, una reducción gradual del 20 % en subsidios a combustibles liberaría 370 millones de dólares anuales que podrían destinarse a educación y energías renovables. (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2024)

9. CONCLUSIONES

- El caso Bo-Trading representa un ejemplo emblemático de cómo la falta de control institucional, la débil regulación y los mecanismos de intermediación opacos pueden generar un grave impacto económico y fiscal para el Estado boliviano. Lejos de cumplir su propósito de optimizar la importación de combustibles, esta empresa se convirtió en un canal de sobrecostos, fuga de divisas y pérdida de transparencia, afectando directamente la estabilidad macroeconómica y la confianza pública.
- Desde el punto de vista teórico, el caso ilustra con claridad el problema agenteprincipal, en el cual los gestores de Bo-Trading actuaron en función de intereses propios y no del Estado, generando altos costos de agencia y reduciendo la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. La falta de incentivos adecuados, mecanismos de auditoría y rendición de cuentas permitió la consolidación de prácticas discrecionales que deterioraron la gobernanza del sector energético.
- En el ámbito económico y social, los costos ocultos derivados del esquema Bo-Trading (como los sobreprecios en combustibles, el aumento de subsidios y la pérdida de divisas) han limitado la capacidad del Estado para invertir en áreas prioritarias, incrementando la presión fiscal y profundizando la desigualdad social. Estos efectos reflejan una estructura institucional vulnerable, incapaz de garantizar la transparencia y la eficiencia en la administración de los recursos estratégicos del país.
- Frente a ello, resulta indispensable implementar reformas estructurales orientadas a fortalecer la transparencia, la regulación y la rendición de cuentas. Entre las medidas prioritarias destacan: la eliminación de intermediarios en la importación de combustibles, el fortalecimiento de los entes de control con capacidad extraterritorial, la modernización del marco normativo y el diseño de una estrategia energética sostenible que promueva la reducción gradual de subsidios y el impulso a las energías renovables.
- El caso Bo-Trading no constituye un hecho aislado, sino el reflejo de una falla sistémica de gobernanza económica. Su análisis debe servir como una advertencia y, al mismo tiempo, como una oportunidad para transformar la gestión pública del sector energético. Solo un Estado eficiente, transparente y responsable podrá garantizar una gestión energética sostenible y equitativa, orientada al desarrollo económico y social de Bolivia.

BIBLIOGRAFÍA

- Banco Central de Bolivia. (2022). Informe anual sobre política de subsidios a los combustibles. La Paz, Bolivia: Banco Central de Bolivia. Recuperado de https://www.bcb.gob.bo
- Boletín Oficial de Bolivia. (2017). Creación de Bo-Trading S.A. bajo jurisdicción paraguaya. La Paz, Bolivia: Gobierno de Bolivia. Recuperado de https://www.gacetaoficial.gob.bo
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2024). Informe económico de América Latina y el Caribe 2024: Bolivia. Santiago, Chile: CEPAL. Recuperado de https://www.cepal.org/es/publicaciones
- Contraloría General de Bolivia. (2021). Informe de auditoría sobre operaciones de YPFB y Bo-Trading. La Paz, Bolivia: Contraloría General del Estado. Recuperado de https://www.contraloria.gob.bo
- Dorgathen, F. (2024). Intermediarios en el comercio de combustibles: El caso Bo-Trading. La Paz, Bolivia: Editorial Energía y Sociedad.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. Academy of Management Review, 14(1), 57–74. https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003
- Fundación X. (2024). Transparencia y gobernanza en empresas estatales bolivianas. La Paz, Bolivia: Fundación X.
- García, L. (2022). Historia y evolución de YPFB: Motor económico de Bolivia. La Paz, Bolivia: Editorial Energía Nacional.
- Gutiérrez, R., & Méndez, P. (2021). Efectos fiscales de los subsidios a los combustibles en Bolivia. La Paz, Bolivia: Universidad Mayor de San Andrés. Recuperado de https://www.umsa.bo
- International Energy Agency (IEA). (2020). World Energy Outlook 2020. París, Francia: IEA. Recuperado de https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
- López, A., & Pérez, M. (2022). Gobernanza corporativa y eficiencia en empresas estatales: Lecciones del sector hidrocarburos en Bolivia. La Paz, Bolivia: Editorial Gestión Pública.
- Martínez, C. (2022). Intermediarios y sobreprecios en la comercialización de combustibles: Análisis del caso Bo-Trading. Santa Cruz, Bolivia: Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Recuperado de https://www.uagrm.edu.bo
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. (2023). Informe de precios y sobrecostos en la importación de combustibles. La Paz, Bolivia: Gobierno de Bolivia. Recuperado de https://www.economiayfinanzas.gob.bo
- Ministerio de Hidrocarburos y Energía. (2019). Política de comercialización de gas y derivados en Bolivia. La Paz, Bolivia: Gobierno de Bolivia. Recuperado de https://www.hidrocarburos.gob.bo
- Ministerio de Hidrocarburos y Energía. (2023). Informe anual sobre producción y exportación de hidrocarburos. La Paz, Bolivia: Gobierno de Bolivia. Recuperado de https://www.hidrocarburos.gob.bo
- Rodríguez, E., & Vargas, L. (2019). Costos ocultos y eficiencia en el sector energético boliviano. La Paz, Bolivia: Universidad Mayor de San Andrés. Recuperado de https://www.umsa.bo
- Rojas, J., & Velasco, P. (2021). Declive de la producción de gas natural en Bolivia: Causas y perspectivas. La Paz, Bolivia: Editorial Energía y Desarrollo.



Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Carrera de Economía



AUTORIDADES:

Decana Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Ph.D. Raquel Arancibia Padilla

Director de la Carrera de Economía

MSc. Rubén Julio Porcel Arancibia

Director en jefe del Boletín

MSc. Rubén Julio Porcel Arancibia

Coordinadores del Boletín

MSc. Daniela Telma Carrasco Aldana Lic. Roberto Zárate Herrera

EQUIPO INVESTIGADOR:



Univ. Soraya Amachuy Durán



Univ. Sandra Beronica Santos Gudiño



Univ. Rodrigo Ninachi

- o economia.usfx
- ⊕ economia.usfx
- G Carrera de Economía USFX

